



SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA 2024 **(English version below / Versão em português abaixo)**

- actualización de cifras al 9 de agosto de 2024 -

**A la ciudadanía venezolana dentro y fuera de Venezuela,
a los Estados miembros de la comunidad internacional,
a los organismos del Sistema de Derechos Humanos y otras instituciones defensoras de
Derechos Humanos,**

Nosotros, todos miembros de la sociedad civil internacional organizada en defensa de los Derechos Humanos y la democracia como sistema de valores compartidos, expresamos nuestra profunda preocupación frente a los recientes acontecimientos del **28 de julio al 6 de agosto de 2024** en Venezuela, los que sabemos no son un hecho aislado sino la agudización de prácticas lesivas de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, en desmedro de una salida cívica a la crisis humanitaria compleja del país.

En el marco de la campaña y elección presidencial, la violencia política e institucional se ha incrementado. La represión y criminalización de las protestas son categóricamente indignantes, y un hecho público y notorio que cercena el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano. Estos se suman a la ya exhaustiva lista de vulneraciones de derechos fundamentales dentro y fuera del país, por parte del gobierno liderado por el ciudadano Nicolás Maduro Moros y que le han merecido el avance de la investigación activa por parte de la **Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad** al Estado venezolano.¹

El patrón de irregularidades en municipios y estados equidistantes, descartan la posibilidad de hechos focalizados o iniciativas de individuos y por el contrario, **dan cuenta de acciones sistemáticas de represión para intentar impedir el libre ejercicio de los derechos de los venezolanos**, en paz.

Tenemos directamente un conflicto entre el gobierno en ejercicio, con aspiraciones de reelección y en control del ente electoral, las Fuerzas Armadas y demás entes policiales excediéndose en el uso de la fuerza coactiva y a una población demandante de respeto a su voluntad soberana, que se ha expresado en las elecciones cívicamente, y que no encuentra eco en la obligación cumplida.

Los anuncios apresurados de una victoria del candidato de gobierno se hacen inverosímiles no sólo por la ausencia de **evidencias básicas resultado de un proceso electoral transparente**, sino por el contraste con las **actas en poder de los mismos ciudadanos** que han formado parte

¹<https://www.icc-cpi.int/news/venezuela-i-situation-icc-appeals-chamber-confirms-decision-authorising-resumption?lang=Spanish>

de las mesas, y que han sido consistentes con las mostradas por la Plataforma Unitaria, por la simple razón de que han sido **aportadas por los testigos de mesa**, en su legítimo derecho.

El proceso de nombramiento del ganador en comicios única y exclusivamente puede darse con la participación de todas las partes involucradas, escrutinios públicos como demanda la ley, totalizaciones transparentes y auditables. **El hecho de no ser públicas las actas de votación en su totalidad**, por parte del ente electoral, con desagregación de las mesas electorales por municipios, **pone en entredicho la veracidad de los resultados anunciados**, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y en marco de la constitución del país. Las expresiones de calle son producto de la indignación e impotencia, reclamo de respeto a la voluntad ciudadana expresada en los comicios. Acto constitucionalmente legítimo. Ha habido manifestaciones en al menos **22** de los **24** estados de Venezuela, incluida la capital². **Más de 1.229 personas detenidas**, entre ellas **106 adolescentes**, **16 personas con discapacidad y 5 indígenas**. Además de **2 personas fallecidas** y **40 personas desaparecidas**.³

Por lo anterior, las más de **300** organizaciones lideradas por venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, con el respaldo ético de **organizaciones locales a escala internacional**, **conminamos**:

Al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a realizar la publicación y entrega de las actas de votación en su totalidad, con desagregación de mesas. Como históricamente se ha realizado el proceso, de modo inmediato y transparente, con respeto de la voluntad ciudadana expresada en los comicios. A su vez, a **respetar y hacer efectiva la voluntad expresada por los votantes**.

Al Ministerio Público y al Poder Judicial, al **cese de la criminalización a la protesta pacífica y activismo político plural**, del derecho ciudadano a la información, a la libre expresión, libertad de asociación y de libre pensamiento.

A las Fuerzas Armadas y demás fuerzas del orden, al cumplimiento de su **responsabilidad constitucional** para asegurar que la expresión del pueblo venezolano sea respetada, a través del cumplimiento de las leyes electorales y a **proteger al pueblo venezolano en el ejercicio de la protesta pacífica**.

Todas, como parte de la sociedad civil internacional organizada, en conjunto, **exhortamos**:

A la comunidad internacional, a respaldar la exigencia del pueblo venezolano de la publicación del total de las actas como acto de transparencia e imparcialidad; al tiempo que tomar acción ante mecanismos regionales e internacionales para el diálogo efectivo y la garantía del cumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Barbados, así como de la protección de los derechos de los venezolanos en el marco del sistema interamericano, aunque no limitado a ello. Al compromiso de los gobiernos democráticos de la región, a ejercer el debido rol en el marco de los sistemas internacionales y a brindar la debida protección internacional a las víctimas.

A las organizaciones defensoras de derechos humanos, a replicar por todos los medios disponibles la información verificada de observadores independientes, sociedad civil, ONGs,

²<https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/comunicado-ovcs-denuncia-escalada-de-represion-y-violencia-en-venezuela>

³<https://foropenal.com/>

sistema de las Naciones Unidas y medios de comunicación, para sortear la censura en el país y contribuir al derecho a la información y debida diligencia. Así mismo, a atender a las víctimas y apoyar el llamado de pacificación con el cese de la represión a ciudadanos y retorno de la institucionalidad.

Aplaudimos la expresión cívica, pacífica y determinada del pueblo venezolano en el ejercicio y defensa de sus derechos, y desde esta red de organizaciones aliadas, honrando nuestra razón de ser, permanecemos al lado de los ciudadanos en búsqueda de paz, democracia, prosperidad y entendimiento.

a los 31 días del mes de julio de 2024.

Suscriben:

1. Coalición por Venezuela (Federación Internacional)
2. Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo (Internacional)
3. Save My Identity (Internacional)
4. Veneactiva (Perú)
5. AMAVEX- Asociación Multicultural de Activistas "Voz y Expresión" (Estados Unidos)
6. PROVEA Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Venezuela)
7. Laboratorio de Paz (Venezuela)
8. Centro de Justicia y Paz CEPAZ (Venezuela)
9. Refugees Seeking Equal Access at the Table, R-SEAT (Canada)
10. Consultoría para los Derechos humanos y el desplazamiento - CODHES (Colombia)
11. Un Mundo Sin Mordaza (Estados Unidos)
12. Forcibly Displaced People Network FDPN (Australia)
13. Unione Nazionale Italiana di Rifugiati ed Esuli UNIRE (Italia)
14. Movimiento Cívico 19 de Abril MC19A (Nicaragua)
15. Código Venezuela (España)
16. CEDRO (Perú)
17. Ciudadanía y Libertad (Cuba)
18. El Derecho a No Obedecer (Colombia)
19. Global South Insight (Bélgica)
20. VENIMANC (Malasia)
21. Humanity for Peace (Marruecos)
22. Instituto de Estudios Socialcristianos - IESC (Perú)
23. CHS Alternativo Lima (Perú)
24. Las Tejedoras (Perú)
25. Movimiento Manuela Ramos (Perú)
26. Juventud, Política y Desarrollo (Perú)
27. Centro de Investigaciones Científicas Sociales y Tecnológicas del Perú CICSTEP (Perú)
28. Centro Loyola Ayacucho (Perú)
29. Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo Madrid (Madrid)
30. Cubanos Libres en Uruguay (Uruguay)
31. VAPA - Venezuelan American Petroleum Association (Estados Unidos)
32. PROMSEX, Centro De Promoción y Defensa De los Derechos Sexuales y Reproductivos (Perú)
33. Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo Santiago (Chile)

34. Corporación Otraparte (Colombia)
35. Nicaragüenses en el mundo (México)
36. Mujer y Ciudadanía (Venezuela)
37. Canada-Venezuela Democracy Forum (Canadá)
38. OCASIVEN (Perú)
39. VenAmerica (Estados Unidos)
40. Fundación Hacienda Panas (Ecuador)
41. Activados Panamá (Panamá)
42. Danzas Eilmar (Colombia)
43. Fundación de Ayuda Social Tierra Santa (Estados Unidos)
44. Cultura Democrática (Argentina)
45. SenoSalud (Estados Unidos)
46. Fundación migrantes Venezolanos en San Cristóbal (República Dominicana)
47. Asociación de Abogados Venezolanos en el Perú (Perú)
48. ASOENVEAR (Argentina)
49. ASOMEVENAR (Argentina)
50. Cultura Democrática (Argentina)
51. PSICOVEN (Argentina)
52. Ven conmigo (Estados Unidos)
53. Asociación Churun Meru (República Dominicana)
54. UMIGRAM - Unión de Migrantes por el Mundo (Brasil)
55. Generación Plateada (Argentina)
56. Asociación de Venezolanos en Trujillo (Perú)
57. MAHUAMPI Venezuela (Colombia)
58. Unidad Juvenil y Estudiantil de Nicaragua (Costa Rica)
59. ASOVENEARG (Argentina)
60. Fundación Escuela de Artes Escénicas Juan Parra (Colombia)
61. Fundación Yo Te Apoyo (Ecuador)
62. Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela, Inc. (Estados Unidos)
63. ONG fundación regalando sueños colven (Colombia)
64. Asociación Civil Venezolanos en Córdoba Argentina (Argentina)
65. Medicos Unidos de Venezuela (Venezuela)
66. Centro para la Libertad y la Renovación (Venezuela)
67. Amigas por Venezuela (República Dominicana)
68. Mesa nacional para las Migraciones y Refugiados (República Dominicana)
69. Venezuelans and Immigrants Aid (Estados Unidos)
70. Hope For Venezuelan Refugees Project (Estados Unidos)
71. ONG Red Reto (España)
72. Fundación Nakama's (Colombia)
73. Migración Sin Estigmas (Colombia)
74. All For Venezuela (Estados Unidos)
75. ASOVENQUIN (Colombia)
76. Espacio de Diálogo y Confluencia de Actores Nicaragüenses (Honduras)
77. Instituto para la transformación social "Las Segovias" (Estados Unidos)
78. Asociación Civil Somos Venezolanos en Quilmes (Argentina)
79. AVENAZ (Estados Unidos y España)
80. ASOVEDRA - Asociación de Venezolanos en Pontevedra (España)
81. Instituto +58 (Brasil)

82. Lazos unidos (Perú)
83. Fundación FERFM (República Dominicana)
84. Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Venezuela)
85. AIRESVEN (Puerto Rico)
86. Guardians of Human Rights Foundation (Alemania)
87. Cecavid (Colombia)
88. VeneTrier e.V. (Alemania)
89. Asociación Líderes Resilientes (Perú)
90. FICU. Fundación para la integración Cultural (Argentina)
91. Huellas Migrantes (España)
92. Fundación Caminando Contigo (República Dominicana)
93. Galicia Activa (España)
94. Fundación mujeres sin fronteras colombo venezolanas (Colombia)
95. Fundación creando Ilusiones (Colombia)
96. La Liga (Estados Unidos)
97. Corporación de mujeres venezolanas en Cúcuta (Colombia)
98. Alianza por Venezuela (Argentina)
99. Venezolanos en Barranquill (Colombia)
100. Grupo ad hoc DDHH venezolanos en Islandia (Islandia)
101. VAC Valdemoro (España)
102. Organización Sin Fronteras (Panamá)
103. Corporación de emprendedores Colombo Venezolano (Colombia)
104. Talleres de Reconstrucción Nacional (Venezuela)
105. Integración Activa Migrantes CDR Mi Perú (Perú)
106. Espacio de Diálogo (Costa Rica)
107. Movimiento campesino (Estados Unidos)
108. Espacio de diálogo y conductores Nicaragua (Nicaragua)
109. AiresVen Italia (Italia)
110. Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en la Argentina (Argentina)
111. PROVEAR - Organización de Profesionales Venezolanos en Argentina (Argentina)
112. Venezolanos en Escobar (Argentina)
113. Asociación Civil Lluvia de Arcoiris (Ecuador)
114. Corporacion Colonia venezolana en Colombia (Colombia)
115. Líderes de voluntad y acción (Perú)
116. Asociación civil Todxs somos iguales (Perú)
117. Red de emprendedores uniendo fronteras (Perú)
118. ASOVEKAR (Argentina)
119. Club Social y Deportivo Venezolano (Argentina)
120. Asociación de venezolanos en Argentina (Argentina)
121. Asociación civil Trabajando sin Frontera (Perú)
122. Constructores de Esperanza (Perú)
123. Venezolanos en Jujuy (Argentina)
124. Kinesiología (Argentina)
125. Gente del Petróleo (Venezuela)
126. CDR Santa Anita (Perú)
127. ONG Migrantes por el Maule (Chile)
128. Asociación de Venezolanos en México venemex (México)

129. Unión Venezolana en Perú (Perú)
130. Legión Internacional de Bomberos Brigada Venezuela (Perú)
131. Canadian International Organization Mission Texas (Estados Unidos)
132. Fundación Entre Dos Tierras (Colombia)
133. Asociación Salto Ángel (Colombia)
134. Sin Fronteras IAP (México)
135. Asociación Migrantes Venezolanos (Colombia)
136. Fundacion Duendes y Angeles Vinotinto (República Dominicana)
137. Globalizateradio (República Dominicana)
138. ASOVEGUA (Guatemala)
139. ASOVENSAL (El Salvador)
140. FUNDATRANSVIDA (Colombia)
141. Paz y Esperanza (Perú)
142. Legislatura de Córdoba (Argentina)
143. Venezolanos en Salta (Argentina)
144. Humanidade Mais que Fronteiras (Brasil)
145. ASOVENECAR (Colombia)
146. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Perú (Coalición de 60 organismos de la sociedad civil en Perú)
147. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (Perú)
148. Demus, Estudio para la defensa de los derechos de la mujer (Perú)
149. Corporación Caribe Afirmativo (Colombia)
150. Agencia Cultural 7-80 (Colombia)
151. Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P. (México)
152. Fundación Venezuela Corp, (Estados Unidos)
153. Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (Ecuador)
154. Illinois Venezuelan Alliance (United States)
155. Unión de Colectividades en Argentina para el Desarrollo (Argentina)
156. CREEDUCACION (Argentina)
157. Asociación de Odontólogos Venezolanos en Argentina (Argentina)
158. ACEVENAR (Argentina)
159. Fundación Colonia de Venezuela en la República Dominicana (República Dominicana)
160. Líderes de voluntarios en Perú (Perú)
161. Venezuela Paita (Venezuela)
162. Ashanti Peru - red peruana de jóvenes afrodescendientes (Perú)
163. Ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos - Marisol Pérez Tello (Perú)
164. Colectivo marcha del orgullo LGTBI Lima (Perú)
165. Baires de libertad (Argentina)
166. FUNVENEX (Colombia)
167. Fundación Refugiados Unidos (Colombia)
168. DIASPOVERD - Diaspora Venezolana en República Dominicana (República Dominicana)
169. Líderes en acción (Venezuela)
170. Fundación Manitas Amarillas (Colombia)
171. Concejal de la ciudad de Córdoba, Jessica Rovetto Yapur - Bloque Cordobeses por La Libertad (Argentina)
172. Concejal Línea Córdoba UCR, Fabre Javier Horacio (Argentina)
173. PP. Pro Córdoba (Argentina)

174. Concejal de la ciudad de Córdoba, Gabriel Horacio Huespe (Argentina)
175. Red de Organizaciones para transformar México AC (México)
176. World Fédération of Humanity (Marruecos)
177. Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente (Ecuador)
178. Refugiados Sin Fronteras (España)
179. Fundación Las Reinas Pepiadas (Ecuador)
180. Voces de la Memoria (Estados Unidos)
181. CICOMP (España)
182. Movimiento Homosexual de Lima (Perú)
183. Asociación Pro Derechos Humanos (Perú)
184. Movimiento Democracia (Estados Unidos y Cuba)
185. Plataforma Cuba dice No a la Dictadura (Cuba)
186. Instituto Progresista (Venezuela)
187. Fundación Venezuela Corp (Estados Unidos)
188. Nicaragüenses en el Mundo (Estados Unidos)
189. Plataforma de Unidad por la Democracia - PUDE (Nicaragua)
190. AVANZA (Nicaragua)
191. Estamos Todos UCR (Costa Rica)
192. Instituto para la Paz y el Desarrollo IPADES (Costa Rica)
193. Red Nacional de Juventudes RNJ (Nicaragua)
194. Acción Universitaria (Nicaragua)
195. Centro de Acción para la Libertad (Nicaragua)
196. Asociación Civil Líderes Sin Fronteras (Perú)
197. Ingenio-Centro de Pensamiento JoveN (Costa Rica)
198. Fundación Yo Estoy Aquí (Colombia/Venezuela)
199. Mecanismos comunitarios de protección Carapungo Ecuavella (Ecuador)
200. SAIR Consultores (Perú)
201. Mi Voto Cuenta (España)
202. Corporación Identidades Diversas (Colombia)
203. WOMMU (Venezuela)
204. Quinta Ola (Perú)
205. Guardians of Human Rights Foundation (International)
206. Youth And Democracy in the Americas (Regional Americas)
207. Capitalismo Consciente (Perú)
208. Maria Gabriela Trompetero - Universidad de Bielefeld (Alemania)
209. Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C. (México)
210. Asociación de venezolanos en Sincelejo (Colombia)
211. Red Mundial de Jóvenes Políticos (Internacional)
212. Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela CICIVEN (Estados Unidos)
213. Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos (Venezuela)
214. Asociación de Venezolanos en Paraguay (Paraguay)
215. Internacional Juvenil - IJ (Internacional)
216. Maria Hawke Resistencia Medica Internacional (Estados Unidos)
217. Associação dos venezolanos no Estado do Amazonas (Brasil)
218. Venezuela Marka Foundation (United States)
219. Resistencia Medica Internacional (Estados Unidos)
220. AVEJAX (Estados Unidos)
221. Juventud Venezolana en el Exterior (Estados Unidos)

222. Un bocadito para Venezuela (Estados Unidos)
223. Fundación El Amparo (Venezuela)
224. Un salvavidas para Venezuela (España)
225. Vinotinto radio (México)
226. Risas Venezuela ONG (México)
227. Venezuela en Baviera e.V. (Alemania)
228. Venezolanos en Sajonia e.V (Alemania)
229. Einheit für Venezuela e.V (Alemania)
230. Venezolanos en Sajonia e.V (Alemania)
231. CISVAC fundación AC (México)
232. Pro Venezuela e.V. (Alemania)
233. Migrantes sin fronteras (Ecuador)
234. Venezolanos en Bélgica (Bélgica)
235. Corporación CLEO (Colombia)
236. Asea Redox (USA)
237. Association Watunna Venezuela (Francia)
238. Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio - Veppex (Estados Unidos)
239. Mujeres sin Fronteras (Chile)
240. Worldwide citizens INC (Estados Unidos)
241. Venezolanos en Munich (Alemania)
242. VenEuropa A.S.B.L. (Bélgica)
243. Asociación para el Desarrollo Indígena Social - ADIS (Nicaragua)
244. Asociación Protección Población Vulnerable - APPV (Perú)
245. Asociación Arte Libre (Costa Rica)
246. Corporación Raíces del Mundo (Chile)
247. Venezolanos En Costa (Costa Rica)
248. Alliance for the Venezuelan Immigrant (Estados Unidos)
249. Nicaragüenses en México (México)
250. Cámara chileno Haitiana de comercio (Chile)
251. Asociación Civil LABOR (Perú)
252. Ciudadanos Todos (Perú)
253. Grupo Propuesta Ciudadana (Perú)
254. Associação Educação Sem Fronteiras (Brasil)
255. Associação Venezuelana em Campo Grande/MS (Brasil)
256. Amigos migrantes sin fronteras (Chile)
257. Federación Mesa Nacional Migrantes y Refugiados (Chile)
258. Asociación Social, Cultural y Deportiva VENCONCHILE (Chile)
259. Fundación Social El Remanente (Chile)
260. Venezuela Global (Brasil)
261. Movimiento Nueva Venezuela (Costa Rica)
262. Asociación civil líderes sin fronteras (Perú)
263. Osc. Ação Social Irmandade Sem Fronteiras (Brasil)
264. Corporación de Inmigrantes Unidos Los Lagos (Chile)
265. Lazos de Libertad Asociación Civil (Argentina)
266. VENEXOS (Portugal)
267. Venexos Jovem (Portugal)
268. Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS Norte (Perú)
269. Se hace Camino al Andar (Perú)

270. Centro de Apoio Mães Migrantes Acompanhadas (Brasil)
271. Asociación civil GRANMAV (Perú)
272. Casa Venezuela Puerto Rico (Puerto Rico)
273. Fundación Alianzas Solidarias (Colombia)
274. Instituto Misioneros de la Consolata (Brasil)
275. Fundación Activados Panamá (Panamá)
276. Cámara Venezolano Uruguay (Uruguay)
277. Manos Veneguayas (Uruguay)
278. Laboratorio de Paz (Venezuela)
279. Central Autónoma de Trabajadores del Perú - CATP (Perú)
280. Asociación de venezolanos en la cordillera central ASOVENCC (Colombia)
281. CitizenGO (México)
282. Vozes sem Fronteiras (Brasil)
283. FUNCOLVEN (Colombia)
284. Fundación almas en Movimiento (Ecuador)
285. CAREF (Argentina)
286. Prof. Francisco Lasarte - Universidad Simón Bolívar (Venezuela)
287. Pastoral de Movilidad Humana de la diócesis de Talca-Curicó (Chile)
288. E-Media Human Rights Consultant (Estados Unidos)
289. Líderes en acción (Venezuela)
290. Asociación Civil por la Libertad de Venezuela (Perú)
291. Centro de Estudios de Violencia y Criminalidad (Perú)
292. Fundación Manos Venezolanas (Ecuador)
293. Fundación Acción Diversa (Ecuador)
294. Fundacion CAS (Ecuador)
295. Red Internacional de Mujeres (EU / LAC)
296. Students For Liberty (Ecuador)
297. Simbiosis Latam - Voz Violeta (Ecuador)
298. Confederación Internacional de Jóvenes Políticos (Ecuador)
299. Asociación Civil Construyendo Venezuela (España)
300. Fundación Diálogo Diverso (Ecuador)
301. EsLibertad ONG (Perú)
302. Students for Liberty (Bolivia)
303. Comisión de Género de Tarariras (Uruguay)
304. EsLibertad ONG - Argentina (Argentina)
305. Unión de Migrantes para la Integración y Desarrollo Humano (Chile)
306. Grupo Mujeres Migrantes (Chile)
307. Refugee Emergency Fund - REF (Malaysia)
308. Derechos Humanos y Diversidad Asociación Civil (Argentina)
309. Fe en Venezuela ORG (Estados Unidos)
310. Latin American Coalition (Estados Unidos)
311. Estudiantes Liberales UCR (Costa Rica)
312. Asociación Civil de Venezolanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires - AVBA (Argentina)
313. Sindicato de Trabajadores de la Industria Inmobiliaria del Perú - SITRAIIP - Base la Libertad (Perú)
314. Fraternidad Venezolana (Colombia)
315. Célula Sindical "Luis Negreiros Vega"- Sec. General Benigno Chirinos Sotelo (Perú)

316. Conenfoque (Colombia)
317. Federación Argentina de Colectividades (Argentina)
318. Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (España)
319. Coordinadora Nacional de Trabajadores Desplazados de Pesca - CONATRADEPP (Perú)
320. Asociación "Frente Organizado de Venezolanos para el Servicio y Asistencia" - FOVSA (Ecuador)
321. Casa Venezuela Arizona (Estados Unidos)
322. La Rayuela de Pablo (Estados Unidos)
323. Fundación Paso Visible (Colombia)
324. Venezolanos Independientes en Canadá (Canadá)

Añade tu firma en el FORMULARIO: <https://forms.gle/JmeqtJW9dxyXBkcz7>

ANEXOS:

Durante los meses previos a los comicios, se observó un constante de desbalance de fuerzas, violación de derechos, desinformación y coerción de la ciudadanía a través de beneficios sociales y subsidios a favor del gobierno de Nicolás Maduro y su candidatura; empleando fondos públicos con fines electorales. Además de las trabas impuestas para que los venezolanos en el exterior pudieran participar, haciendo reinterpretación de normas legales, inventando requisitos no establecidos, reduciendo el tiempo para el proceso de registro de votantes y días de atención, desproporcionados por demás, para la actualización del registro electoral permanente y finalmente, limitando el derecho al voto de 5.5 millones de venezolanos en el extranjero.

La censura, persecución, encarcelamiento y desapariciones forzosas de dirigentes políticos, líderes sociales y activistas de derechos humanos y ciudadanos en descontento se acrecentaron considerablemente en los días previos a la elección. Esto, unido a la amenaza con la promulgación de leyes para constreñir el espacio cívico y perseguir el pluralismo político, violan directamente los principios y derechos contenidos en nuestra Constitución nacional, leyes nacionales, así como convenios y tratados regionales, la observancia de los derechos humanos fundamentales y el más mínimo respeto a los ciudadanos como eje central de la democracia. Una parte de las fuerzas de oposición democrática al gobierno, realizó consultas primarias en donde salió electa Maria Corina Machado a quien se le impidió la inscripción de su candidatura, luego a Corina Yoris como su reemplazo y posteriormente, el entorpecimiento de la campaña del candidato Edmundo González Urrutia.

En el marco del monitoreo hecho por Coalición por Venezuela y una veintena de organizaciones aliadas, en su rol de veeduría social del proceso, desplegado a través de las redes de organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, con estricto cumplimiento de nuestros mandatos estatutarios de no activismo político partidista e imparcialidad, pudimos documentar irregularidades, violaciones a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, al Reglamento de Procesos Electorales, Manual de Mesa Electoral y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los puntos pactados en el Acuerdo de Barbados y vulneraciones a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Entre

dichas vulneraciones, dentro de Venezuela mayormente, pero con incidencias también en dependencias consulares, fueron más comúnmente las siguientes:

- Demoras en la apertura y cierre de mesas de votación
- Negación del acceso a los testigos en el acto de escrutinio
- Actos de coerción, vigilancia y/o manipulación al momento del voto, así como también irregularidades en el voto asistido
- Hechos de violencia con armas de fuego, agresiones físicas y verbales
- Robo y/o destrucción de material electoral.
- Negatoria de entrega de actas de escrutinio a los testigos.
- Suplantación de identidad de electores
- Apertura de las cajas electorales antes de la instalación de las mesas
- Cortes de luz, de internet y robo de cableados
- Allanamientos a casas de personas integrantes de partidos políticos opositores al gobierno así como de testigos, miembros de mesa, veedores sociales y defensores de derechos humanos
- Deportaciones y prohibiciones de ingreso a invitados internacionales como testigos al proceso electoral, así como de individuos extranjeros como acompañantes de la sociedad civil.
- Listas paralelas con datos de los votantes para fines coercitivos.
- Cambios extemporáneos en el lugar de votación, en el caso dentro del país hacia otros estados y en dependencias consulares, los cambios fueron hechos a centros de votación en Venezuela.

El patrón de las mismas irregularidades en municipios y estados equidistantes, descartan la posibilidad de hechos focalizados o iniciativas de individuos y por el contrario, **dan cuenta de acciones coordinadas para intentar impedir el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de los venezolanos con transparencia y competitividad**, en paz.

Los anuncios de una victoria del candidato de gobierno se hacen inverosímiles no sólo por la ausencia de evidencias básicas en el resultado del proceso electoral, sino por el contraste con las actas en poder de los ciudadanos, así como los resultados de *exit polls* de distintas empresas, a pie de urnas. Es vital aclarar que el proceso de nombramiento del ganador en comicios electorales única y exclusivamente puede darse a través de resultados públicos, transparentes y auditables. **El hecho de no ser públicas las actas de votación en su totalidad, con desagregación de las mesas electorales por municipios, pone en entredicho la veracidad de los resultados anunciados**, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, basándose en los principios de transparencia y auditabilidad del proceso, son indispensables para su validez.

La represión y extremación del uso de la fuerza coactiva por parte de las autoridades policiales y militares en los últimos días vulneran el marco constitucional venezolano en el extremo del derecho a la vida, a la integridad física, derecho a la protesta, reunión y libertad de expresión. Todos delitos directos que constituyen una violación a los derechos humanos, con responsabilidad penal internacional. Aunado a estas, está la criminalización expresa del fiscal general de la República, Tarek William Saab, a las ONG con amenaza de privaciones de libertad. Las organizaciones no gubernamentales hacemos una labor indispensable en defender los derechos de las personas sin sesgos políticos, de raza, credo o sexo. Amenazar con privación de libertad por el ejercicio de nuestro trabajo -amparado en la ley- implica un delito en sí.



Ante las causas que originaron la mayor crisis migratoria del continente, la posibilidad de una nueva ola de desplazamientos forzados, de carácter inminente y masivo, la violación sistemática de los derechos humanos dentro del país documentada ante diversos mecanismos y observadores internacionales de la materia, es nuestro deber y compromiso defender los derechos humanos, promover la participación social y defender las libertades de los venezolanos dentro y fuera del territorio nacional en todos los espacios.

JOINT INTERNATIONAL STATEMENT OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN THE FRAMEWORK OF THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN VENEZUELA

(Original in Spanish)

To Venezuelan citizens inside and outside of Venezuela,

To the Member States of the international community,

To the organizations of the Human Rights System and other institutions defending Human Rights,

We, all members of international civil society organized in defense of Human Rights and democracy as a system of shared values, express our deep concern about the recent events of July 28, 29, and 30, 2024, in Venezuela. We know these are not isolated events but the intensification of practices that harm the fundamental rights of its citizens to the detriment of a civic solution to the country's complex humanitarian crisis.

Political and institutional violence has increased in the context of presidential campaigns and elections. The repression and criminalization of protests are categorically outrageous and a public and notorious fact that restricts the whole exercise of the civil and political rights of the Venezuelan people. These are added to the already exhaustive list of violations of fundamental rights inside and outside the country by the government led by citizen Nicolás Maduro Moros, and that has earned him the advancement of the **active investigation by the International Criminal Court for crimes against humanity to the Venezuelan State.**

The pattern of irregularities in distant municipalities and states rules out the possibility of localized events or initiatives of individuals and, on the contrary, shows systematic actions of repression to try to prevent the free exercise of the rights of Venezuelans in peace.

We have directly a conflict between the government in office, with aspirations of re-election and in control of the electoral body, the Armed Forces and other police forces exceeding the use of coercive force, and a population demanding respect for its sovereign will, which has been expressed civically in the elections, and that does not find echo in the fulfilled obligation.

The hasty announcements of a victory of the government candidate are made implausible not only by the absence of primary evidence resulting from a transparent electoral process but by the contrast with the minutes in possession of the same citizens who have been part of the tables and that have been consistent with those shown by the Unitary Platform, for the simple reason that they have been provided by the table witnesses, in their legitimate right.

The process of appointing the winner in electoral elections can only and exclusively occur with the participation of all parties involved, public scrutiny as required by law, and transparent and auditable totals. The fact that the electoral body does not make the ballots of the vote public, as per law, with municipalities disaggregating the electoral tables, calls into question the integrity of the results announced by the provisions of the Organic Law of Electoral Processes and the framework of the country's constitution.

Street expressions are the product of anger and impotence, a demand for respect for the citizens' will expressed in the elections—a constitutionally legitimate act. There have been demonstrations in at least 20 of the 24 states of Venezuela, including the capital. **More than 1,350 people have been arrested, including children and the elderly, and 22 people have been killed and at least 40 have been forcibly disappeared.**

Therefore, the more than 300 organizations from different nationalities, inside and outside of Venezuela, with the ethical support of local organizations on an international scale, urge:

The National Electoral Council will publish and deliver the vote minutes, with tables disaggregated. This process has historically been carried out immediately and transparently, with respect for the citizens' will expressed in the elections. In turn, this will respect voters and make their will effective.

To the Public Ministry, the cessation of the criminalization of peaceful protest and plural political activism, of the citizen's right to information, freedom of expression, freedom of association, and freedom of thought. Including a cease on the harassment to Diplomats and Embassies within Caracas and asylum seekers within those embassies.

To the Armed Forces, to fulfill their constitutional responsibility to ensure that the expression of the Venezuelan people is respected, through compliance with electoral laws and to protect the Venezuelan people in the exercise of peaceful protest.

We urge:

To the international community, to support the demand of the Venezuelan people for the publication of all the voting ballots as an act of transparency and impartiality while taking action before regional and international mechanisms for effective dialogue and the guarantee of compliance with the provisions of the Barbados Agreements, as well as the protection of the rights of Venezuelans within the framework of the inter-American system, although not limited to it. The democratic governments must commit to exercising their role in the international systems to provide international protection to victims.

To Human rights organizations to replicate by all available means the verified information of independent observers, civil society, NGOs, the United Nations system, and the media to circumvent censorship in the country and contribute to the right to information and due diligence. Likewise, they should attend to the victims and support the **call for pacification with the cessation of citizen repression and the return of institutionality.**

We applaud the Venezuelan people's civic, peaceful, and determined expression in exercising and defending their rights. From this network of allied organizations honoring our *raison d'être*, we remain at the side of citizens searching for peace, democracy, prosperity, and understanding.

On July 30, 2024,

Background:

During the months before the elections, a constant imbalance of forces, violation of rights, disinformation, and coercion of citizens through social benefits and subsidies in favor of the government of Nicolás Maduro and his candidacy was observed, using public funds for electoral purposes, in addition to the obstacles imposed so that Venezuelans abroad could participate, reinterpreting legal norms, inventing non-established requirements, reducing the time for the voter registration process and days of attention, disproportionate for updating the permanent electoral registry and finally, limiting the right to vote of 5.5 million Venezuelans abroad.

Censorship, persecution, imprisonment, and forced disappearances of political leaders, social leaders, human rights activists, and disgruntled citizens increased considerably in the days before the election. The threat of enactment of laws to constrict civic space and persecute political pluralism directly violates the principles and rights contained in our national Constitution, national laws, regional conventions and treaties, the observance of fundamental human rights, and the most minimal respect for citizens as the central axis of democracy. A part of the democratic opposition forces to the government-held primary consultations in which Maria Corina Machado was elected and was prevented from registering her candidacy, then Corina Yoris as her replacement and later, the hindering of the campaign of the candidate Edmundo Gonzalez Urrutia.

Within the framework of the monitoring carried out by Coalición por Venezuela and some twenty allied organizations, in their role of social oversight of the process, deployed through the networks of non-governmental organizations and human rights defenders, in strict compliance with our statutory mandates of non-partisan political activism and impartiality, we were able to document irregularities, violations to the Organic Law of Electoral Processes, the Electoral Processes Regulation, the Electoral Table Manual and the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, as well as the points agreed in the Barbados Agreement and violations to the Economic, Social, Cultural and Environmental Rights (ESCR). Among these violations, mainly within Venezuela but also affecting consular offices, the most common were the following:

- Delays in the opening and closing of polling stations.
- Denial of access to witnesses during the counting of ballots.
- Acts of coercion, surveillance, and manipulation at the time of voting, as well as irregularities in assisted voting.
- Acts of violence with firearms, physical and verbal aggression.
- Theft and destruction of electoral material.
- Refusal to deliver tally sheets to witnesses.
- Impersonation of voters
- Opening of the electoral boxes before the installation of the polling stations.
- Power and internet cuts and wiring theft.
- Raids on houses of members of political parties opposing the government, as well as of witnesses, table members, social observers, and human rights defenders.
- Deportations and prohibitions on entry for international guests as witnesses to the electoral process and foreign individuals accompanying civil society.
- Parallel lists with voter data for coercive purposes.
- Untimely changes in the place of voting, in the case within the country to other states and consular offices, were made to voting centers in Venezuela.

The pattern of the same irregularities in equidistant municipalities and states discards the possibility of focalized facts or initiatives of individuals and, on the contrary, accounts for coordinated actions to try to prevent the free exercise of Venezuelans' civil and political rights with transparency and competitiveness in peace.

The announcements of a victory of the government candidate become implausible not only due to the absence of primary evidence on the outcome of the electoral process but also due to the contrast with the minutes in possession of the citizens, as well as the results of exit polls of different companies, at the polls. It is vital to clarify that naming the winner in electoral elections can only and exclusively occur through public, transparent, and auditable results. The fact that the voting records are not public in their entirety, with disaggregation of the polling stations by municipalities, calls into question the integrity of the announced results by the provisions of the Organic Law of Electoral Processes, based on the principles of transparency and auditability of the process, which are indispensable for its validity.

The repression and extreme use of coercive force by the police and military authorities in recent days violate the Venezuelan constitutional framework in the extreme of the right to life, physical integrity, right to protest, assembly, and freedom of expression. All direct crimes constitute a human rights violation, with international criminal responsibility. In addition, the Republic's Attorney General, Tarek William Saab, has expressly criminalized NGOs by threatening to deprive them of their freedom. Non-governmental organizations do indispensable work defending people's rights without political, racial, creed, or sex bias. Threatening deprivation of liberty for exercising our work -protected by law- implies a crime.

Faced with the causes that originated the biggest migratory crisis of the continent, the possibility of a new wave of forced displacements of imminent and massive character, the systematic violation of human rights within the country documented before various mechanisms and international observers of the matter, it is our duty and commitment to defend human rights, promote social participation and protect the freedoms of Venezuelans inside and outside the national territory in all spaces.

DECLARAÇÃO INTERNACIONAL CONJUNTA DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA SOBRE A SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NA VENEZUELA 2024

Aos cidadãos venezuelanos dentro e fora da Venezuela,

aos Estados membros da comunidade internacional

aos organismos do Sistema de Direitos Humanos e a outras instituições de defesa dos direitos humanos,

Nós, todos os membros da sociedade civil internacional organizada em defesa dos direitos humanos e da democracia como um sistema de valores compartilhados, expressamos nossa profunda preocupação com os recentes acontecimentos de 28, 29 e 30 de julho de 2024 na Venezuela, que sabemos não são um evento isolado, mas a intensificação de práticas prejudiciais aos direitos fundamentais de seus cidadãos, em detrimento de uma solução cívica para a complexa crise humanitária no país.

No contexto da campanha e da eleição presidencial, a violência política e institucional aumentou. A repressão e a criminalização dos protestos são categoricamente ultrajantes e um fato público e notório que restringe o pleno exercício dos direitos civis e políticos do povo venezuelano. Esses fatos se somam à já exaustiva lista de violações de direitos fundamentais dentro e fora do país pelo governo liderado por Nicolás Maduro Moros, que fizeram com que o Estado venezuelano fosse investigado ativamente pelo **Tribunal Penal Internacional** por crimes contra a humanidade.

O padrão de irregularidades em municípios e estados equidistantes exclui a possibilidade de eventos ou iniciativas direcionadas por indivíduos e, ao contrário, **revela ações repressivas sistemáticas para tentar impedir que os venezuelanos exerçam livremente seus direitos em paz.**

Temos um conflito direto entre o governo em exercício, com aspirações de reeleição e no controle do órgão eleitoral, as Forças Armadas e outras forças policiais que se excedem no uso da força coercitiva, e uma população que exige respeito à sua vontade soberana, que se expressou civicamente nas eleições e que não encontra eco na obrigação cumprida.

Os anúncios precipitados de uma vitória do candidato do governo tornam-se implausíveis não só pela ausência de **provas básicas resultantes de um processo eleitoral transparente**, mas também pelo contraste com as **atas em posse dos mesmos cidadãos** que fizeram parte das mesas, e que foram consistentes com as mostradas pela Plataforma Unitária, pela simples razão de terem sido **fornecidas pelas testemunhas da mesa**, em seu legítimo direito.

O processo de nomeação do vencedor nas eleições pode ocorrer única e exclusivamente com a participação de todas as partes envolvidas, escrutínios públicos conforme exigido por lei, totais transparentes e auditáveis. **O fato de o órgão eleitoral não ter tornado públicos os registros de votação em sua totalidade**, com a discriminação das seções eleitorais por município, **coloca em questão a veracidade dos resultados anunciados**, de acordo com as disposições da Lei Orgânica de Processos Eleitorais e da constituição do país.

Os protestos de rua são o produto da indignação e da impotência, uma exigência de respeito à vontade dos cidadãos expressa nas eleições. Um ato constitucionalmente legítimo. Houve manifestações em pelo menos **22 dos 24 estados da Venezuela, incluindo a capital. Mais de 1.350 pessoas foram detidas, incluindo crianças e idosos, e 22 pessoas morreram e 40 pessoas estão desaparecidas.**

Pelas razões acima, as mais de 300 organizações lideradas por venezuelanos, dentro e fora da Venezuela, com o apoio ético de organizações locais em escala internacional, **exigem:**

Que o Conselho Nacional Eleitoral publique e entregue os registros de votação na íntegra, com uma discriminação por seção eleitoral. Como tem sido historicamente o caso, o processo deve ser realizado de forma imediata e transparente, com respeito à vontade dos cidadãos expressa nas eleições. Por sua vez, **respeitar e fazer cumprir a vontade expressa pelos eleitores.**

Ao Ministério Público, que **deixe de criminalizar o protesto pacífico e o ativismo político plural**, o direito dos cidadãos à informação, à livre expressão, à liberdade de associação e ao livre pensamento.

Às Forças Armadas, que cumpram sua **responsabilidade constitucional** de garantir que a expressão do povo venezuelano seja respeitada por meio do cumprimento das leis eleitorais e de **proteger o povo venezuelano no exercício do protesto pacífico.**

Pedem:

À comunidade internacional que apoie a demanda do povo venezuelano pela publicação de todas as atas como um ato de transparência e imparcialidade; ao mesmo tempo em que tome medidas perante os mecanismos regionais e internacionais para o diálogo efetivo e a garantia do cumprimento das disposições dos Acordos de Barbados, bem como a proteção dos direitos dos venezuelanos no âmbito do sistema interamericano, embora não se limite a isso. O compromisso dos governos democráticos da região de exercer seu devido papel no âmbito dos sistemas internacionais e de proporcionar a devida proteção internacional às vítimas.

Que as organizações de direitos humanos reproduzam, por todos os meios disponíveis, informações verificadas de observadores independentes, da sociedade civil, de ONGs, do sistema da ONU e da mídia, a fim de contornar a censura no país e contribuir para o direito à informação e à devida diligência. Da mesma forma, atender às vítimas e apoiar o pedido de pacificação com a cessação da repressão aos cidadãos e o retorno da institucionalidade.

Aplaudimos a expressão cívica, pacífica e determinada do povo venezuelano no exercício e na defesa de seus direitos e, a partir desta rede de organizações aliadas, honrando nossa razão de ser, permanecemos ao lado dos cidadãos em busca de paz, democracia, prosperidade e compreensão.

Aos 31 dias do mês de julho de 2024.

Fundo:

Durante os meses que antecederam as eleições, observou-se um constante desequilíbrio de forças, violação de direitos, desinformação e coerção dos cidadãos através de benefícios e subsídios sociais a favor do governo de Nicolás Maduro e da sua candidatura, utilizando fundos públicos para fins eleitorais, em além dos obstáculos impostos para que os venezuelanos no exterior pudessem participar, reinterpretação de normas legais, inventando requisitos não estabelecidos, reduzindo o tempo do processo de recenseamento eleitoral e dias de atenção, desproporcional para atualização do registro eleitoral permanente e, por fim, limitando o direito de voto de 5,5 milhões de venezuelanos no exterior.

A censura, a perseguição, a prisão e os desaparecimentos forçados de líderes políticos, líderes sociais, activistas dos direitos humanos e cidadãos descontentes aumentaram consideravelmente nos dias anteriores às eleições. A ameaça de promulgação de leis para restringir o espaço cívico e perseguir o pluralismo político viola directamente os princípios e direitos contidos na nossa Constituição nacional, nas leis nacionais, nas convenções e tratados regionais, na observância dos direitos humanos fundamentais e no mínimo respeito pelos cidadãos como o eixo central da democracia. Uma parte das forças democráticas de oposição às consultas primárias do governo nas quais Maria Corina Machado foi eleita e impedida de registar a sua candidatura, depois Corina Yoris como sua substituta e posteriormente, o entrave à campanha do candidato Edmundo Gonzalez Urrutia.

No âmbito do monitoramento realizado pela Coalición por Venezuela e cerca de vinte organizações aliadas, no seu papel de supervisão social do processo, desdobradas através das redes de organizações não-governamentais e defensores dos direitos humanos, em estrita conformidade com os nossos mandatos estatutários de ativismo político apolítico e imparcialidade, pudemos documentar irregularidades, violações à Lei Orgânica dos Processos Eleitorais, ao Regulamento dos Processos Eleitorais, ao Manual da Mesa Eleitoral e à Constituição da República Bolivariana da Venezuela, bem como aos pontos acordados em o Acordo de Barbados e as violações dos Direitos Económicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DESC). Entre estas violações, principalmente na Venezuela, mas que afectam também os escritórios consulares, as mais comuns foram as seguintes:

- Atrasos na abertura e encerramento das assembleias de voto.
- Negação de acesso a testemunhas durante a contagem dos votos.
- Atos de coação, vigilância e manipulação no momento da votação, bem como irregularidades no voto assistido.
- Atos de violência com armas de fogo, agressões físicas e verbais.

- Roubo e destruição de material eleitoral.
- Recusa de entrega dos editais às testemunhas.
- Personificação de eleitores
- Abertura das urnas eleitorais antes da instalação das assembleias de voto.
- Cortes de energia e internet e roubo de fiação.
- Invasões a casas de membros de partidos políticos que se opõem ao governo, bem como de testemunhas, membros de mesa, observadores sociais e defensores dos direitos humanos.
- Deportações e proibições de entrada de convidados internacionais como testemunhas do processo eleitoral e de estrangeiros acompanhantes da sociedade civil.
- Listas paralelas com dados dos eleitores para fins coercivos.
- Mudanças intempestivas no local de votação, no caso dentro do país para outros estados e repartições consulares, foram feitas em centros de votação na Venezuela.

O padrão das mesmas irregularidades em municípios e estados equidistantes descarta a possibilidade de fatos focalizados ou iniciativas de indivíduos e, ao contrário, dá conta de ações coordenadas para tentar impedir o livre exercício dos direitos civis e políticos dos venezuelanos com transparência e competitividade na paz.

Os anúncios de vitória do candidato do governo tornam-se implausíveis não só pela ausência de provas primárias sobre o resultado do processo eleitoral, mas também pelo contraste com as actas em posse dos cidadãos, bem como com os resultados das sondagens à saída de diferentes empresas, nas urnas. É fundamental esclarecer que a nomeação do vencedor nas eleições eleitorais só e exclusivamente pode ocorrer por meio de resultados públicos, transparentes e auditáveis. O facto de os registos de votação não serem públicos na sua totalidade, com desagregação das mesas de voto por municípios, põe em causa a integridade dos resultados anunciados pelo disposto na Lei Orgânica dos Processos Eleitorais, assente nos princípios da transparência e auditabilidade do processo, indispensáveis à sua validade.

A repressão e o uso extremo da força coercitiva pelas autoridades policiais e militares nos últimos dias violam o quadro constitucional venezuelano no extremo do direito à vida, à integridade física, ao direito de protesto, de reunião e à liberdade de expressão. Todos os crimes diretos constituem uma violação dos direitos humanos, com responsabilidade criminal internacional. Além disso, o Procurador-Geral da República, Tarek William Saab, criminalizou expressamente as ONG, ameaçando privá-las da sua liberdade. As organizações não governamentais realizam um trabalho indispensável na defesa dos direitos das pessoas sem preconceitos políticos, raciais, credos ou sexuais. Ameaçar a privação da liberdade para exercer o nosso trabalho -protegido pela lei- implica um crime.

Diante das causas que originaram a maior crise migratória do continente, a possibilidade de uma nova onda de deslocamentos forçados de carácter iminente e massivo, a violação sistemática dos direitos humanos no país documentada perante diversos mecanismos e observadores internacionais do assunto, é o nosso dever e compromisso defender os direitos humanos, promover a participação social e proteger as liberdades dos venezuelanos dentro e fora do território nacional em todos os espaços.

PRISE DE POSITION INTERNATIONALE CONJOINTE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ORGANISÉE SUR LA SITUATION DES DROITS DE LA PERSONNE DANS LE CADRE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DU VENEZUELA 2024

**Aux citoyens vénézuéliens à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela
Aux États membres de la communauté internationale,
Aux organismes du Système des droits de la personne et autres institutions de Défense
des Droits de la personne**

Nous, membres de la société civile internationale organisée pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie comme système de valeurs partagées, exprimons notre profonde inquiétude face aux récents événements du 28, 29 et 30 juillet 2024 au Venezuela, que nous savons ne pas être un fait isolé mais bien la détérioration des droits fondamentaux de ses citoyens et l'aggravation de pratiques nuisibles à une sortie civique de la crise complexe du pays.

Dans le cadre de la campagne et des élections présidentielles, la violence politique et institutionnelle s'est accentuée. La répression et la criminalisation des mouvements de protestation sont absolument scandaleuses, et il est de notoriété publique que le plein exercice des droits civils et politiques du peuple vénézuélien est bafoué. Ceci s'ajoute à la longue liste de entorses du gouvernement dirigé par le citoyen Nicolás Maduro Moros aux droits fondamentaux à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ce qui a mérité le lancement d'une enquête de la part de la Cours Internationale pour les crimes contre l'humanité contre l'État vénézuélienne.

Le patron des irrégularités dans les municipalités et les états équilibrés, écartent la possibilité d'actes ciblés ou d'initiatives d'individus et révèlent au contraire des actions systématiques de répression pour tenter d'empêcher le libre exercice des droits des vénézuéliens, en paix.

Nous avons directement un conflit entre le gouvernement en exercice, avec des aspirations de réélection, qui contrôle la machine électorale, les Forces Armées et autres organismes policiers, usant à l'excès la force coercitive, et une population qui demande le respect de sa volonté souveraine, qui s'est exprimée civiquement lors des élections et qui ne trouve pas d'écho à cette obligation accomplie.

Les annonces expéditives d'une victoire du candidat du gouvernement deviennent invraisemblables non seulement par l'absence de données probantes résultant d'un processus électoral transparent, mais par le contraste avec les procès-verbaux en possession des citoyens formant partie des tables de vote, et qui sont cohérentes avec celles montrées par la *Plataforma Unitaria*, pour la simple raison qu'elles ont été apportées par les témoins de table, en droit légitime.

Le processus de nomination du gagnant aux élections ne peut se faire uniquement et exclusivement qu'avec la participation de toutes les parties impliquées, un dépouillement public minutieux comme le demande la loi, un comptage transparent et vérifiable. Le fait que les procès-verbaux ne soient pas rendus publiques dans leur intégralité par des institutions électorales, avec le démantèlement des tables électorales par des municipalités, remet en question la véracité des résultats annoncés, en accord avec ces principes établis par la *loi de Procès Électoraux* dans le cadre constitutionnel du pays. Les manifestations de la rue sont le

produit de l'indignation et de l'impuissance, réclamant le respect de la volonté citoyenne exprimée lors des élections. Acte constitutionnel légitime. Il y a eu des manifestations dans au moins 22 des 24 états du Venezuela, incluant la capitale. Plus de 1229 personnes arrêtées, avec parmi elles des enfants et des adultes majeurs et l'on compte déjà 24 morts et plus de 40 personnes ont disparu de force.

Pour ce qui précède, les plus de 250 organisations dirigées par des vénézuéliens, à l'intérieur et à l'extérieur du Venezuela, avec l'appui éthique d'organisations locales à l'échelle internationale, enjoignons :

Au Consejo Nacional Electoral de publier et de livrer les procès-verbaux du vote dans leur intégralité, avec désagrégation des bureaux de votes. Comme cela a été historiquement réalisé, immédiatement et de façon transparente, dans le respect de la volonté citoyenne exprimée lors des élections. Ainsi qu'à respecter et rendre effective la volonté exprimée par les votants.

Au Ministère Public, que cesse la criminalisation de la manifestation pacifique et de l'activisme politique pluriel, du droit citoyen à l'information, de la libre expression, liberté d'association et de libre pensée.

Aux Forces Armées, à l'exercice de leur responsabilité constitutionnelle pour assurer que l'expression du peuple vénézuélien soit respectée, par l'application des lois électorales, et que l'exercice de la contestation du peuple vénézuélien soit protégé.

Nous exhortons :

La communauté internationale, d'appuyer l'exigence du peuple vénézuélien qui demande la publication de l'intégralité des procès-verbaux, comme un acte de transparence et d'impartialité; et également de prendre des mesures auprès des mécanismes régionaux et internationaux pour établir un dialogue efficace et garantir le respect des principes établis dans les Accords de la Barbade, ainsi que pour la protection des droits des vénézuéliens dans le cadre du système interaméricain, bien que non limités à ces derniers. À l'engagement des gouvernements démocratiques de la région, d'exercer leur rôle dans le cadre des systèmes internationaux et d'apporter la protection internationale due aux victimes.

Les organisations de défense des droits de la personne, de reproduire par tous les moyens disponibles l'information vérifiée des observateurs indépendants, la société civile, les ONG, le système des Nations Unies et les moyens de communication, pour contrer la censure dans le pays et contribuer au droit à l'information et vérifications nécessaires. Également d'apporter le soutien aux victimes et appuyer l'appel à la pacification par l'arrêt de la répression des citoyens et le retour de l'institutionnalité.

Nous applaudissons l'expression civique, pacifique et déterminée du peuple vénézuélien dans l'exercice et la défense de ses droits, et à partir de ce réseau d'organisations alliées, honorant notre raison d'être, nous restons aux côtés des citoyens à la recherche de la paix, la démocratie, la prospérité et la compréhension.

Le 31 juillet 2024